



Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia](#).

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material para cualquier propósito, incluso comercialmente.

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia



Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

Características esenciales del procedimiento administrativo de carácter electrónico en Colombia

Essential characteristics of the electronic administrative procedure in Colombia

¹ Oscar Mauricio García Ramírez

Resumen

Los avances tecnológicos han sido cada vez más sorprendentes, y por consiguiente han generado grandes impactos en las sociedades del mundo, de esta manera, el derecho ha tenido que evolucionar y sujetarse a dichos cambios. Por tal motivo, es necesario estudiar la implementación e importancia que ostenta el procedimiento administrativo de carácter electrónico dentro de la administración pública en Colombia, específicamente en lo concerniente a sus elementos de validez y eficacia dentro de las nuevas tecnologías de la información y el ciberespacio que complementan todo lo referente al concepto de electrónico y en general, en todas las características que configuran. En consecuencia, el presente trabajo de investigación se encuentra enfocado a resolver el problema jurídico basado fundamentalmente en el ya mencionado procedimiento administrativo para así lograr entender su aplicación e implementación para una idónea administración de justicia. Además de ello, es necesario determinar los principios fundantes de esta importante figura y determinar toda la efectividad de los medios electrónicos para así poder establecer todos los posibles vacíos normativos que se puedan generar.

Palabras Clave: Colombia, Nuevas Tecnologías, Administración pública, Procedimiento Administrativo, Actos administrativos, Medios Electrónicos, Validez, Eficacia, Acceso a la información, Características.

¹ Artículo resultado de investigación elaborado para optar por el título de Abogado de la Universidad Católica de Colombia por parte de Estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia. Correo institucional omgarcia62@ucatolica.edu.co. Este artículo fue dirigido por el Doctor Jairo Cabrera docente investigador de la Universidad Católica de Colombia.

Abstract

Technological advances have been increasingly surprising, and consequently they have generated great impacts on world societies, in this way, the law has had to evolve and be subject to these changes. For this reason, it is necessary to study the implementation and importance of electronic administrative acts within the public administration in Colombia, specifically regarding their validity and efficacy elements within the new information technologies and cyberspace that they complement everything concerning the concept of electronics and in general, in all the characteristics they make up. Consequently, this research work is focused on solving the legal problem based fundamentally on the aforementioned administrative acts in order to understand their application and implementation for a suitable administration of justice. In addition to this, it is necessary to determine the founding principles of this important figure and determine all the effectiveness of electronic media in order to establish all the possible regulatory gaps that may be generated.

Keywords: Colombia, New Technologies, Public Administration, Administrative Procedure, Administrative Acts, Electronic Means, Validity, Efficiency, Access to information, Characteristics.

Introducción

El presente artículo de investigación tiene la finalidad de obtener un análisis específico de los elementos indispensables que configuran el procedimiento administrativo de carácter electrónico. De tal manera que, se pretende estudiar con amplio detenimiento toda la importancia que contienen los requisitos indispensables que caracterizan al procedimiento como tal y la relevante connotación con la administración pública. En efecto, a lo largo del presente escrito se esbozarán las herramientas primordiales de los medios electrónicos, su efectividad, regulación e importancia con el contexto actual que vive la sociedad colombiana. En donde sin duda alguna, se podrá dar solución a la pregunta de investigación planteada y basada en las características indispensables para la configuración del procedimiento administrativo electrónico en Colombia.

Con lo anteriormente relacionado, se presentarán argumentos críticos aportados por los estudiosos de la materia e importantes pronunciamientos jurisprudenciales. En

consecuencia, es pertinente manifestar que todos los actos administrativos de carácter electrónico hacen parte formal del procedimiento administrativo electrónico y son una manifestación de la voluntad emitida por la administración de justicia y que idóneamente surgen a través de medios electrónicos, así lo establece en artículo 57 de la Ley 1437 del año 2011 más conocido como el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). Sin embargo, para el año 2021 se adicionó una importante modificación a la Ley en mención en donde se le aportaron más garantías a los medios electrónicos y a la justicia digital; pues se trata de la Ley 2080 del año 2021 que se estudiará en el presente trabajo. Finalmente, se quiere llegar a una conclusión respecto al problema de investigación; estudiando la justicia en línea, las sedes electrónicas, el acceso y uso de los medios electrónicos y la importancia de los actos administrativos de carácter electrónico.

Sumario

Introducción. 1. El acto administrativo electrónico en Colombia y procedimiento administrativo. 1.1. Nueva modificación a la Ley 1437 del año 201. 2.Principios fundamentales de los actos administrativos de carácter electrónico. 2.1. Principio de inalterabilidad. 2.2.Principio de autenticidad. 2.3.Principio de integridad. 2.4.No repudio. 3.Elementos de eficacia y validez. 4. Notificación electrónica. 4.1. Gobierno electrónico. 4.2. Sedes electrónicas. Conclusiones. Referencias.

1. El acto administrativo electrónico en Colombia y procedimiento administrativo

El mundo sufrió unas transformaciones en los últimos años, dichas transformaciones llevaron a la existencia de la internet; figura que ha cambiado totalmente las dinámicas sociales, en Colombia la administración de justicia juega un papel fundamental en el manejo y representación idónea de todas sus entidades administrativas en aras de preservar los derechos fundamentales, los principios constitucionales y a la sociedad misma. En el artículo segundo de la constitución política de 1991 se estipulan todos los fines del estado, tales como garantizar la efectividad de los principios, promover la prosperidad general, entre otros. Por otra parte, el artículo 209 constitucional se le otorga el campo a la función administrativa como servidora de todos los intereses generales de los interesados, garantizando así los principios esenciales de eficacia, economía,

moralidad, celeridad, igualdad, imparcialidad y publicidad. Todos estos principios son realmente importantes a la hora de participar o ejecutar algún cargo en el ámbito de la administración pública, de lo contrario vulnerarían los fines esenciales del estado. Como consecuencia de ello, el doctor Devis Echandia ha definido que un documento electrónico sin más es “La representación en forma electrónica de hechos jurídicamente relevantes, susceptibles de ser representados en una forma humanamente comprensible” (Ibáñez, 2017. Pág. 22)

Con el decreto 2150 del año 1995, específicamente en su artículo 26 se estipula que todas las entidades de la Administración pública deben habilitar un sistema de transmisión electrónica de datos para así poner a los usuarios en contacto y que estos puedan lograr una comunicación más efectiva. (Ibáñez, 2017).

Es importante resaltar que el gobierno electrónico de América Latina y el Caribe se ha destacado por fomentar documentos relevantes que establecen diversas estrategias de interoperabilidad. Un ejemplo claro de ello, es el libro de interoperabilidad de gobierno electrónico para América Latina y la sociedad del Caribe. Esto con el fin esencial de que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad a la administración pública. Realizando esta acción es mucho más elemental acceder a las figuras electrónicas promoviendo la transparencia y nuevos métodos de acceso, erradicando toda forma de corrupción. Pues se necesita hoy en día eliminar todo tipo de barreras existentes entre los individuos y la administración e impulsar el desarrollo de la sociedad y del conocimiento, otorgándoles el derecho a las personas de actuar en los medios electrónicos. (Sánchez Acevedo, 2016). Mediante la ley 527 del año 1999 se permitió el acceso y el uso de los mensajes de datos, centrando su estudio en el comercio electrónico y en las firmas digitales. Es pertinente resaltar que esta ley no promueve aspectos de la administración pública pero sí le otorgó un enorme valor a los medios electrónicos y la facultad de poder ser empleados en todo el ámbito del derecho.

La esencia misma de la ley se justifica en la idea de que los medios electrónicos tienen igual preponderancia que los documentos escritos en el papel. Este método se empleó de cierta forma para contribuir con la celeridad en la realización de todas las actividades sujetas a esta ley y su mero reconocimiento permitió grandes e importantes cambios en toda la esfera jurídica. En efecto, para el año 2012 con el mandato del presidente Juan Manuel Santos, se impuso en la administración pública una política muy particular denominada “cero papel” en la administración, con el fin de lograr cierta importancia en el uso de los medios electrónicos y así ayudar a contribuir en muchos factores tales como

el medio ambiente, la descongestión judicial, para erradicar la corrupción, promover la celeridad en todas las actuaciones instauradas por vía electrónica, prevalecer la transparencia como un principio, entre otros aspectos positivos. Igualmente, con la ley 1564 del año 2012 por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso, se aprobaron los medios electrónicos para recibir notificaciones de algunas providencias emitidas por los jueces.

También con la ley 1712 del año 2014 por la cual se promulgó la ley de transparencia y el acceso a la información pública, se logró aprobar el uso de los medios electrónicos como un método de mayor accesibilidad a la administración de justicia. Para finalmente llegar a la ley 1437 ya conocida como el CPACA, quien se encarga fundamentalmente de regular el uso de los medios electrónicos exclusivamente en el campo de la jurisdicción contenciosa administrativa que ha sido objeto del presente escrito. Para el doctor Marco Emilio Sánchez un importante estudioso en la administración pública, hay específicamente dos métodos para poder acceder a la información “la primera es cuando una persona hace una petición para acceder a ella y la segunda es cuando la información pública como iniciativa del mismo Estado es puesta a disposición de las personas sin que medie petición alguna. Esto es conocido como divulgación proactiva y el resultado es transparencia activa” (Sánchez, M. 2016. Pág., 125).

El doctrinante promueve su postura en lograr una buena administración pública. Más aún, la ley 1712 de 2014 promueve fuertemente la transparencia en el acceso a la administración, para que de esta manera las personas cuenten con una mayor probabilidad de confianza al momento de emplear las tecnologías, es bien conocido que el uso de los medios electrónicos para muchas personas hoy en día en la sociedad Colombiana es un concepto nuevo en cuanto al campo y aplicación del derecho se trata, ya que incluso existen desconocimientos severos de todas las actuaciones que la administración pública promueve en papel, ahora en el ámbito tecnológico el vacío tiende a ser muchísimo mayor. Otro importante doctrinante, el Doctor Alejandro Ruiz Magíster en Derecho Administrativo resalta que

En la administración pública, desde hace unos años, algunas actuaciones, se están empezando a realizar de manera electrónica, por ejemplo, la inscripción a concursos para el ingreso a la carrera administrativa, la presentación de derechos de petición, quejas y reclamos, se realizan vía internet, pero las actuaciones que contengan la manifestación de la voluntad de la administración no eran posibles (Ruíz, 2016, pág. 7)

Con el Decreto 2150 del año 1995, específicamente en su artículo 26 se estipula que todas las entidades de la Administración pública deben habilitar un sistema de transmisión electrónica de datos para así poner a los usuarios en contacto y que estos puedan lograr una comunicación más efectiva. (Fuentes, 2017). Esto se debe a que el Gobierno electrónico en toda América Latina y del Caribe se ha encargado de fomentar documentos electrónicos y que son relevantes para establecer las distintas estrategias de interoperabilidad. Un ejemplo importante de ello, radica en el libro de interoperabilidad del Gobierno electrónico para América Latina y su función principal es que los ciudadanos puedan acceder con mayor facilidad a la administración pública; promoviendo siempre la transparencia y los nuevos métodos de acceso con el fin de erradicar cada vez más la corrupción. Por lo tanto, hoy en día es necesario eliminar todo tipo de barreras existentes entre los individuos y la administración para impulsar siempre el desarrollo en la sociedad, combatir el desconocimiento y otorgarle el derecho a todos los ciudadanos para que actúen a través de medios electrónicos (Sánchez, 2014).

Ahora bien, antes de que emergiera toda la contingencia de la emergencia sanitaria, a través de la Ley 527 del año 1999 se permitió el acceso y el uso de los mensajes de datos, centrando su estudio en el comercio electrónico y en las firmas digitales. Aunque, es imprescindible resaltar que esta Ley en principio no promovía aspectos de la administración pública pero, con el tiempo sí le otorgó un enorme valor a los medios electrónicos y la facultad de poder ser empleados en todo el ámbito del derecho.

Conforme a lo anteriormente señalado, la Ley antes descrita tiene una esencia y esta radica en justificar la idea de que los medios electrónicos son de la misma preponderancia que los documentos plasmados en el papel. Además, esta herramienta se creó principalmente para incentivar y darle celeridad a la realización de todas las actividades derivadas de esta Ley, aportando también grandes cambios en toda la esfera de la administración. Es importante mencionar que específicamente en el año 2012 con el Gobierno del antes presidente de la república Juan Manuel Santos se propuso en su administración un emblema denominado “cero papel” y justamente fue con la finalidad de propagar el uso de los medios electrónicos y disminuir los factores ecológicos que afectan al medio ambiente.

A raíz de esta situación, las actividades judiciales se comenzaron a descongestionar. En consecuencia, con la Ley 1564 del año 2012 por medio de la cual se expidió el Código General del Proceso, se aprobaron los medios electrónicos para recibir notificaciones de algunas providencias emitidas por los jueces. También con la Ley 1712 del año 2014 por

la cual se promulgó la ley de transparencia y el acceso a la información pública, se logró aprobar el uso de los medios electrónicos como un método de mayor accesibilidad a la administración de justicia (Orozco,2020)

Finalmente con la Ley 1437 más conocida como el CPACA, nació la regulación del uso de medios electrónicos, específicamente en materia contenciosa administrativa y que será objeto de estudio del presente escrito. Por tal motivo, es pertinente resaltar que para el Doctor Marco Sánchez, existen dos formas o medios para acceder a la información. Por un lado, existen las peticiones para acceder a la administración misma y por el otro lado, se encuentran las informaciones públicas que son iniciativas del Estado mismo, en donde se realizan diversas divulgaciones llamadas proactivas y se generan así resultados de transparencia activa (Muñoz. 2016).

El artículo 57 de la Ley anteriormente mencionada, aduce que los actos administrativos electrónicos deben estar regulados por las autoridades competentes y que se les permite la expedición por medios digitales siempre y cuando se les garantice su autenticidad, integridad y disponibilidad. Así mismo, en el artículo 58 se habla de los archivos electrónicos que son básicamente;

La conservación de los documentos electrónicos que contengan actos administrativos de carácter individual, deberá asegurar la autenticidad e integridad de la información necesaria para reproducirlos, y registrar las fechas de expedición, notificación y archivo (Ley 1437, 2011, art 58).

Por último, en el artículo 59 se habla del expediente electrónico en donde se manifiesta que,

Es el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan. El expediente electrónico deberá garantizar condiciones de autenticidad, integridad y disponibilidad. (Ley 1437, 2011, art 59).

Por otro lado, la Ley 1712 de 2014 promueve la transparencia en el acceso a la administración, para que de esta manera las personas cuenten con una mayor probabilidad de confianza al momento de emplear las tecnologías. Aunque anteriormente se incentivaba el uso de los medios electrónicos en específico para sobrellevar los asuntos contenciosos de la administración pública; estas situaciones únicamente eran alternativas puesto que existía la herramienta principal conocida como la presencial. Sin embargo, dadas las condiciones de la emergencia sanitaria; el mundo cambió y esto se debe a que

todas las actividades presenciales se tuvieron que reemplazar por comunicaciones y actividades realizadas a través de medios magnéticos.

En consecuencia, es importante mencionar que existen diversas definiciones sobre actos administrativos. Sin embargo, el objetivo esencial del presente trabajo es centrar el estudio en el campo electrónico de los ya mencionados actos. Por tal motivo, se tiene que el acto administrativo se forma bien sea cuando una autoridad o un particular acoge una decisión que es emitida a través de forma digital y que existen actos administrativos de carácter general o particular; en donde los segundos van dirigidos exclusivamente a personas determinadas (Ortega, 2017).

En otras palabras:

El acto administrativo como concepto jurídico además de ser una manifestación del querer por parte de la administración, también se traduce en el deseo, juicio o conocimiento propuesto y elaborado por la administración pública en el ejercicio de su potestad administrativa (Orozco, 2020, pág. 6).

En efecto, se torna bastante indispensable hablar acerca de la manifestación de voluntad ya que es el elemento clave para la emisión de los actos administrativos propiamente dichos. Sin embargo, no se puede dejar a un lado el componente electrónico que se le atribuye a la esencia e importancia del presente escrito.

Otro de los aspectos más importantes para hablar del buen uso y acceso a la internet se encuentra plasmado dentro del marco de la educación y más hoy en día con la contingencia que afronta el país por COVID - 19 y con la declaración de la emergencia sanitaria implementada por el actual presidente Ivan Duque Marquez. Pues para nadie es un secreto que todas las actividades laborales y en especial educativas han tenido que migrar a la virtualidad provisional hasta que exista una vacuna contra dicho virus. En consecuencia, la educación virtual es uno de los derechos fundamentales más relevantes en estos tiempos para los estudiantes y a razón de ello, es necesario que cuenten con los elementos o herramientas indispensables para poder acceder a una educación de calidad; sobre todo en las poblaciones más vulnerables de todo el territorio nacional (Valderrama, 2019).

Asimismo, se deben establecer más políticas públicas para mitigar la contingencia y limitación que esta nueva pandemia ha generado en el ámbito de la educación, porque como ya se dijo anteriormente; pese a que el acceso a la internet se ha incentivado progresivamente, aún existen personas en Colombia que no tienen un fácil acceso y es

precisamente por sus condiciones de pobreza. Para ello, el Gobierno nacional ha implementado bastantes bibliotecas y varias fuentes de wifi de internet gratis para que las personas puedan acceder sin mayores complicaciones.

De tal manera que, actualmente sí existe una inclusión digital por parte del Gobierno Nacional, considerando el acceso a la internet como un derecho completamente fundamental. Sin embargo, es pertinente mencionar que aún no se encuentra constituido como derecho fundamental enmarcado en la Constitución Política de Colombia del año 1991.

Pese a esta situación, se han tenido que generar distintos proyectos de inclusión digital que de cierta manera incluyan a las personas que se encuentran normalmente excluidas por la sociedad misma. Es decir, ciudadanos en el territorio que por sus condiciones económicas y socioculturales no tienen un fácil acceso a la información y a las comunicaciones, en otras palabras; personas marginadas por diversos factores que perjudican negativamente la idea de tener un fácil acceso a la internet para todos y todas. En la práctica se ha evidenciado como diversas personas no pueden contar con estas condiciones o herramientas para el acceso a los medios electrónicos ya que se encuentran alejados o ubicados mal geográficamente o simplemente existen otras personas que tampoco pueden acceder porque no saben leer, porque desconocen el idioma o porque cuentan con una discapacidad física o mental que les impide acceder a dicha información (López, 2009).

Por esta razón, se tiene que:

La inclusión digital, se encuentra situada como un punto fundamental del orden del día de la justicia social y los derechos humanos, puede fomentar nuevos espacios para la tolerancia y la comprensión y contrarrestar los intentos de personas y grupos que buscan imponer valores, costumbres o creencias en el mundo digital (Rincón, 2016, pág, 21).

La implementación de la inclusión digital en los derechos humanos y la justicia social se puede desarrollar de una manera idónea con ayuda de la democracia e implementación del desarrollo social. Para el doctor López, un importante doctrinante en la materia, expresa que:

El beneficio potencial sería conseguir una mayor y más fuerte producción de la infraestructura social basada en la colaboración y la cooperación, así como en ideas para la promoción futura y la formación de bibliotecas y

profesionales en el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para mejorar el acceso de la comunidad a la comunicación (López, 2009, pág, 117).

Lo anteriormente manifestado, se traduce en la idea fundamental de incentivar el acceso a la internet y priorizar para así obtener un gran contenido intelectual en el acceso del mismo y en la formación de las TIC para el acceso equitativo a todas las personas del territorio nacional.

Igualmente, como ya se ha manifestado; el acceso a internet debe ser garantizado para todos los habitantes del territorio colombiano. Sin embargo, debido a ciertas dificultades que ya se han expresado, hoy en día el acceso a la información para todos aún no es una realidad ya que en Colombia no existe una cobertura de internet para las poblaciones más alejadas y desde luego que esta situación tiene unas consecuencias negativas para un verdadero acceso a la justicia digital. Aunque se debe mencionar que en otros países del mundo ya se ha implementado este sistema gratuito y de fácil acceso para todos. Pues España tiene una cobertura de internet bastante importante que detona diversas garantías para el acceso a los medios electrónicos.

Otro de los aspectos más importantes que se derivan del acceso a internet es la promulgación de la seguridad electrónica por parte de la administración pública y en cabeza del Estado, porque para obtener un adecuado acceso a la internet es necesario contar con una infraestructura completamente idónea que garantice la calidad de la internet y permita las velocidades de banda ancha respectivas para tal fin. Sin embargo, “la estabilidad de internet de banda ancha en Colombia cayó durante la pandemia de covid-19” (Valencia, 2020).

Es así que teniendo en cuenta lo destacado en líneas previas, se anota que en estudios actuales por parte de la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), tan solo el 58,7% de la población mundial cuenta con un acceso a internet. De tal manera que en la actualidad así como se considera un derecho completamente humano, también existe una desigualdad frente al tema y que se encuentra afectando a una gran parte de la población en el mundo. Lo anterior se debe a que la principal causal de desigualdad frente al acceso a internet es producto de la falta en los recursos económicos ya que muchos países en el mundo no cuentan con una infraestructura de telecomunicaciones completamente sustentada por las garantías elementales de la tecnología. Es importante manifestar que la mayoría de las poblaciones que no cuentan con esta importante

herramienta hacen parte de los países en vía de desarrollo. Esta falta de conexión a internet provoca un fuerte aislamiento social (Valencia, 2020).

En efecto, Colombia no es la excepción, pues se ha evidenciado cómo en diversas zonas del territorio nacional aún no se cuenta con un acceso a la internet y esta situación perjudica gravemente las condiciones de las personas vulnerándose no solo este derecho fundamental en cuanto a que se observan afectaciones a otros derechos fundamentales tales como la salud, educación, trabajo, derecho de acceder a la información, derecho de petición, acceso a la justicia, entre otros.

Todo lo anteriormente mencionado perjudica directamente a las personas que quieren acceder a las notificaciones o publicaciones de los actos administrativos de carácter general o particular según sea el caso que emiten las entidades administrativas en sus respectivas funciones. De tal manera que, actualmente para hablar de medios electrónicos se debe hacer énfasis en el acceso a internet para que las personas puedan hacer uso de los mecanismos de defensa a los que haya lugar.

En consecuencia, los actos administrativos cuentan con unos elementos que son bastante importantes y que contribuyen a su configuración. Uno de ellos, es la validez que le aporta legalidad al acto mismo. Por otro lado, se debe tener en cuenta que también existen unos elementos categorizados como externos e internos, de mérito y de oportunidad para la producción del acto administrativo (Orozco, 2020).

Para continuar hablando sobre los elementos indispensables del acto administrativo electrónico conocidos como la eficacia y validez, es necesario realizar un enfoque en las tecnologías de la información que permiten y aportan seguridad a todas las figuras o conceptos que se encuentran compuestos de forma electrónica y que sirven para la administración de justicia.

De tal manera que, hoy en día el eje central se encuentra plasmado en los medios electrónicos y específicamente en el uso o acceso de la internet para así lograr una información más ágil y de primera mano. En consecuencia, es pertinente resaltar que las sociedades del mundo se han tenido que enfrentar a la nueva revolución de las tecnologías más conocida como la 4.0. En efecto, esta nueva figura propicia la productividad de los sistemas del mundo y ayuda sin duda a combatir cualquier desconocimiento que se pueda tener con respecto a dicha información (Amaya, 2018).

Por otro lado, se debe tener en cuenta que:

La sociedad de la información es una fase de desarrollo social caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y

administración pública) para obtener y compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera (Becerra, 2015, pág, 51).

Ahora bien, se debe considerar que el acceso y uso a la internet categoriza o genera varios preceptos atribuibles a los derechos humanos. De tal manera que; el acceso de la internet se considera como necesario e indispensable para garantizar todo lo concerniente a ciertos derechos tales como: la educación, el trabajo, la salud, el derecho a reunirse libremente y a conformar una asociación. En donde gracias a la web 2.0 se han generado diversos derechos relativos a la participación política de los ciudadanos dentro de una sociedad. Adicionalmente a ello, es indispensable tener en cuenta que estos derechos se encuentran completamente ligados a los elementos de transparencia y buena gestión documental emanados por la administración pública. En donde, las TIC juegan el papel más fundamental en esta esfera ya que de ahí se desprende el e- Government (Gutierrez, 2011).

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante destacar que el acceso a la internet no solo garantiza los anteriores derechos mencionados, sino que también propende porque el ciudadano se pueda relacionar de manera efectiva con las autoridades públicas, como se expresa en la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico (2007) donde se denota este derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con sus Gobiernos y Administraciones Públicas; es así que el Estado debe ser garante en el acceso a la internet no solo por ser un derecho fundamental sino también por los derechos que están vinculados al mismo, viéndose así que la administración está en el deber de propender que en el acceso a este derecho se garanticen los principios de igualdad, legalidad, conservación, transparencia y accesibilidad, proporcionalidad, responsabilidad y adecuación tecnológica (Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, 2007) y claramente la protección de los datos personales de las personas que acceden al mismo.

Esto quiere decir que, si existen herramientas reales en donde se manifiesta que el acceso a la internet ayuda a garantizar ciertos derechos fundamentales de las personas. Además que, se considera como un elemento indispensable para la materialización de la dignidad humana de todos los ciudadanos que acceden a la utilización de esta herramienta para el desempeño de sus actividades. Sin embargo, en cuanto al acceso e información de la administración pública se debe tener en cuenta que también es una figura que le aporta seguridad, agilidad y disponibilidad a las gestiones.

Por otra parte, debido al desarrollo del uso de las tecnologías de la información y la implementación de los medios electrónicos en actividades cotidianas, el acceso a la información se puede considerar como un derecho fundamental en donde le aporta igualdad a todas las personas que tienen el derecho de acceder a dicha información. No obstante, es necesario tener en cuenta que ciertos alcances jurídicos concernientes al acceso a internet no siempre pueden generar aspectos positivos en la esfera pública, ya que; puede alterar los derechos fundamentales y restringir o limitar ciertos derechos. Sin embargo, esta situación desde luego que se combate con el buen uso o manejo que se le realice a la figura (Muñoz, 2016), En este mismo sentido según la doctrina nacional, uno de los aspectos más negativos que puede generar este nuevo concepto es la limitación en el derecho de las telecomunicaciones, lo cual se consideraría bastante negativo. Pero como se dijo anteriormente, todo esto depende de la implementación de políticas públicas para el acceso a la internet.

Existen unos principios de los actos administrativos de carácter electrónico que son bastante relevantes a la hora de expresar la manifestación de voluntad por parte de dicha administración, por lo tanto no se pueden vulnerar o de lo contrario se estarían transgrediendo los fines esenciales del Estado mismo. Como consecuencia de lo anteriormente estipulado, es necesario que para la expedición de actos administrativos generales de carácter electrónico es necesaria la existencia del documento electrónico ya que es “La representación en forma electrónica de hechos jurídicamente relevantes, susceptibles de ser representados en una forma humanamente comprensible” (Fernandez, 2014. P, 21).

El Doctor José Gabriel Storch de la Universidad Complutense en Madrid, manifiesta que en pleno siglo XXI existen aún enormes barreras en cuanto a la implementación, buen uso y normalización del aprendizaje en el mundo electrónico. Por esta razón, existen innumerables inconvenientes de acceso. Por tanto, es necesario sentar como base indispensable que la tecnología y el derecho se encuentran completamente ligadas, pues son una ayuda mutua. (García S, 2018). En concordancia, las notificaciones electrónicas en la esfera de lo contencioso administrativo tienen su connotación en la legislación Colombia con la Ley 1437 del 2011 por medio de la cuál se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ya denominado como CPACA.

Sin embargo, no está demás decir que el uso de las nuevas tecnologías y el acceso de los ciudadanos a ellas se encuentran sujetos a todas las transformaciones sufridas por el

derecho administrativo en donde se evidencian cambios de diversos tipos tales como; jurídicos, económicos, políticos y sociales. Transformaciones que desde luego abarcan la revolución tecnológica, por ello es prudente indagar más a fondo y realizar proyectos de prevención en aras de proteger a la administración. Según Isaac Martín Delgado Doctor en derecho administrativo de la Universidad de Castilla, la revolución de las nuevas tecnologías “va a ser la reforma más importante a que se tiene que enfrentar el Derecho Administrativo de nuestra era” (Delgado I. , 2009).

Además de ello, se considera que: “Hablar hoy de la administración pública es hablar necesariamente de la administración electrónica” (Delgado I. , 2009). Pues es necesario tener en cuenta que al emerger las nuevas tecnologías se le han dado importantes connotaciones a las mismas, tal es el punto que hoy en día se puede hablar de una revolución tecnológica derivada de este importante fenómeno y que aportará grandes contribuciones en el campo administrativo. Por esta razón, es preciso traer a colación el concepto de notificación electrónica para observar el reto tecnológico y el ámbito jurídico que hoy se encuentra regulado en la legislación Colombiana.

Así las cosas, al hacer un estudio de la materia se ha logrado encontrar que es importante “crear programas y sistemas que se adecuen a las exigencias constitucionales, legales y, en general, normativas que caracterizan al Derecho Administrativo” (Delgado I., 2009) porque las notificaciones en el campo administrativo fungen como aspectos sustanciales del procedimiento mismo y de esta forma pueden hacer parte fundamental en la creación de una verdadera y eficaz administración de justicia.

Los principios constitucionales amparan esta perspectiva. Por un lado, se encuentra la tutela judicial efectiva, mediante la cual se le da a conocer todo el contenido de los actos administrativos a las partes interesadas para que puedan acceder a su derecho de contradicción y se puedan defender dentro del término estipulado específicamente sobre lo pronunciado en dichas notificaciones, siempre y cuando no caduque la acción para interponer algún recurso. Por otro lado, las entidades administrativas se encuentran obligadas a notificar a tiempo sobre todos los actos administrativos para que como ya se dijo anteriormente, las partes puedan invocar las acciones pertinentes. Esto quiere decir que, la notificación es completamente esencial a la administración. Ahora bien, en cuanto a la notificación electrónica se debe decir que es alterna a la notificación personal y se encuentra regulada en el artículo 56 del CPACA en donde se le otorga competencia a las entidades administrativas de notificar por medios electrónicos.

Las autoridades podrán notificar sus actos a través de medios electrónicos, siempre que el administrado haya aceptado este medio de notificación. Sin embargo, durante el desarrollo de la actuación el interesado podrá solicitar a la autoridad que las notificaciones sucesivas no se realicen por medios electrónicos, sino de conformidad con los otros medios previstos en el capítulo quinto de dicha disposición. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar la administración. (Art 57, CPACA). En el artículo 197 del CPACA se plasma una regulación de la dirección electrónica para efectos de notificaciones y también se entienden como notificaciones personales las que sean enviadas por vía electrónica.

En concordancia, es adecuado resaltar que en Colombia las notificaciones electrónicas se surtirán a las personas que así lo hayan querido, pues de lo contrario al no señalar este medio preferente de notificación se les realizará la respectiva notificación de forma personal. Además, la administración pública requiere que todos los actos de las entidades administrativas sean eficaces a partir de la fecha en que se dicten ya que por esencia “la notificación se instala en el derecho como estandarte de garantía y de seguridad en beneficio del interesado” (Sánchez Acevedo, 2016) Dicho lo anterior, es necesario poder comprender los métodos específicos de las notificaciones electrónicas ya que al ser un campo muy extenso es poco promovido. Por tanto, al detonar un punto importante en la administración se le debe dar el estudio y enfoque que merece.

1.1.Nueva modificación a la Ley 1437 del año 2011

Actualmente se realizó una importante modificación a la Ley 1437 del año 2011 más conocida como el CPACA, en donde se le aportó bastante relevancia a las actuaciones realizadas a través de medios electrónicos y se promulgó en razón de la congestión judicial que se detona en estos tiempos. Se trata de la Ley 2080 del 25 de enero del año 2021, en donde con el artículo 1 se modificaron los numerales 1 y 9 del artículo 5 de la ya mencionada Ley. Además de ello, se le adicionaron dos numerales más, quedando de la siguiente forma:

1. Presentar peticiones en cualquiera de sus modalidades, verbalmente, o por escrito, o por cualquier otro medio idóneo y sin necesidad de apoderado, así como a obtener información oportuna y orientación acerca de los requisitos que las disposiciones vigentes exijan para tal efecto. Las anteriores actuaciones podrán ser adelantadas o

promovidas por cualquier medio tecnológico o electrónico disponible en la entidad o integradas en medios de acceso unificado a la administración pública... (Ley 2080,2021. Art.1).

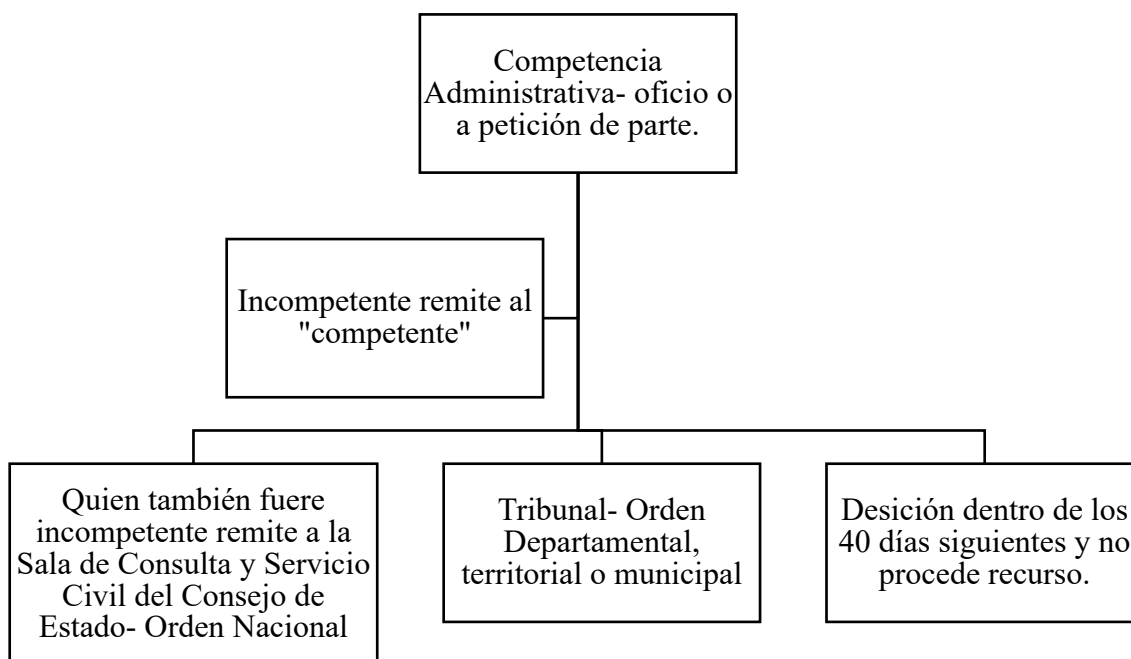
Lo anteriormente manifestado significa que ahora los ciudadanos y en general las personas del territorio colombiano tienen más garantías para comunicarse con las entidades y/o personas que ejerzan actividades administrativas a través de derechos de petición electrónicos y a recibir una contentación oportuna y de fondo por los mismos medios.

Ahora bien, también se agregó el artículo 2 de la Ley en mención que modifica el inciso tercero del artículo 39 de la Ley 1437 del año 2011, en donde se expresa que:

Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. (Ley 1437, 2011. Art 39).

Para comprender más a fondo lo mencionado en el apartado anterior, es indispensable observar y analizar la siguiente figura:

Figura N. 1



Fuente: Creación propia, inspirado de la Ley 2080 del 25 de enero del año 2021.

Además, se modificó parcialmente el artículo 47 de la Ley 1437 del año 2011; específicamente en lo concerniente al parágrafo, en donde se manifestó que las “actuaciones administrativas contractuales sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas especiales sobre la materia. En los procedimientos administrativos sancionatorios fiscales el término para presentar descargos y solicitar o aportar pruebas será de cinco (5) días” (Ley 2080,2021. Art.3).

Del mismo modo, se adicionó al CPACA el artículo 47A en donde se habla de la suspensión de manera provisional para los procedimientos administrativos que sean de carácter sancionatorios y fiscales. Esto quiere decir que, cuando se presenten procedimientos de esta categoría entonces se le dará una suspensión de manera provisional al servidor público, en donde no se le concederá una remuneración por dicho tiempo suspendido. El término será de 30 días con una prórroga del mismo tiempo inicialmente estipulado y deberá ser revocada por los motivos suficientes para dicha decisión (Ley 2080, 2021).

Se adicionó el artículo 53 A en el CPACA, por medio del cual se regula el uso de los medios electrónicos y la habilitación de los canales digitales por medio de las autoridades pertinentes para que los ciudadanos se puedan comunicar de manera idónea con la administración pública. Además:

A través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, podrá a través de reglamento establecer para cuáles procedimientos , trámites o servicios será obligatorio el uso de los medios electrónicos por parte de las personas y entidades públicas. El ministerio garantizará las condiciones de acceso a las autoridades para las personas que no puedan acceder a ellos (Ley 2080, 2021. Art.8).

Asimismo, se agregó un registro conforme a los lineamientos de las políticas de protección de datos para el uso de los medios electrónicos en donde se concede la garantía y derecho a cualquier persona que desee acudir a la administración por medios digitales y se asegura la gratuidad de dichos procedimientos. Sin embargo, se hace la aclaración de que cuando existan peticiones de información o consulta realizadas a través de medios tecnológicos entonces no se necesitara del registro antes mencionado (Ley 2080, 2021).

En el artículo 10 de la Ley 2080 del año 2021 se modificó el artículo 56 del CPACA, en donde se habla acerca de la notificación electrónica por parte de las autoridades administrativas y la facultad que poseen en notificar todos sus actos por medios de canales digitales, aunque se debe tener en cuenta que dicha notificación procederá por medios electrónicos solo si la persona acepta que así se realice, de lo contrario se surtirá presencialmente. Por otro lado:

Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán a través del servicio de notificaciones que ofrezca la sede electrónica de la autoridad. Los interesados podrán acceder a las notificaciones en el portal único del Estado, que funcionará como un portal de acceso. La notificación quedará surtida a partir de la fecha y hora en que el administrado acceda a la misma, hecho que deberá ser certificado por la administración (Ley 2080,2021. Art. 10).

También se le dio lugar al expediente electrónico, en donde a través del artículo 11 de la Ley 2080 del año 2021 se modificó el artículo 59 del CPACA. Definiendo así, que el expediente electrónico se caracteriza por ser una serie de documentos que configuran los lineamientos de todo un procedimiento administrativo y que además consta de diversa información. No obstante, este expediente por esencia debe amparar los elementos y requisitos esenciales de integridad, disponibilidad y autenticidad. Puesto que estos conceptos detonan seguridad y el cumplimiento mínimo que se necesita para completar

los respectivos requisitos de archivo, las autoridades competentes deberán estar completamente atentas al cumplimiento de estos lineamientos (Ley 2080, 2021).

En consecuencia, es necesario destacar que también se agrego un apartado en la Ley 1437 del año 2011 plasmado en el artículo 60 A en donde se definen el uso y características de las sedes electrónicas compartidas, de tal manera que:

La sede electrónica compartida será el Portal Único del Estado colombiano, a través de la cual la ciudadanía accederá a los contenidos, procedimientos, servicios y trámites disponibles por las autoridades. La titularidad, gestión y administración de la sede electrónica compartida será del Estado colombiano. (Ley 2080, 2021. Art. 11).

Esto quiere decir que, toda autoridad administrativa deberá implementar una sede electrónica para facilitarle el acceso a los administrados, en donde debe proveer una dirección electrónica con todos los parámetros que exige el Ministerio de las Tecnologías de la información y de las Comunicaciones. Entre tanto, todas las sedes electrónicas por esencia deberán garantizar los requisitos de disponibilidad, fácil acceso, seguridad, calidad, neutralidad e interoperabilidad. De igual forma, las autoridades competentes para dicha función se encuentran en la obligación de responder por la información allí suministrada y velar por la disponibilidad para los interesados (Ley 2080, 2021).

Por otro lado, existe también una recepción de los documentos electrónicos de acuerdo con el registro electrónico de los documentos, en donde se deben cumplir los siguientes requerimientos:

1. Llevar un estricto control y relación de los documentos electrónicos enviados y recibidos en los sistemas de información, a través de los diversos canales, incluyendo la fecha y hora de recepción.
2. Mantener los sistemas de información con capacidad suficiente y contar con las medidas adecuadas de protección de la información, de los datos y en general de seguridad digital.
3. Emitir y enviar un mensaje acusando el recibo o. salida de las comunicaciones indicando la fecha de esta y el número de radicado asignado (Ley 2080, 2021. Art.14).

Por último, se manifiesta la obligación de publicar los actos administrativos de carácter general, de lo contrario estos no serán plenamente obligatorios. De tal manera

que al hablar de actos administrativos electrónicos estos deberán ser debidamente publicados en el Diario Oficial; conservando siempre los elementos de disponibilidad, autenticidad e integridad (Ley 2080, 2021).

2. Principios fundamentales de los actos administrativos de carácter electrónico

Es importante aducir que existen unos principios esenciales que aportan positivamente a la configuración del concepto acto administrativo de carácter electrónico, pues a través de estos preceptos se garantiza un poco más la seguridad de los actos mismos. En efecto, el objetivo principal se basa en la erradicación de la inseguridad que de cierta manera se tiene frente a los medios electrónicos. Y que gracias a dichos principios, todos los procedimientos implementados por estos medios ostentan la misma calidad y nivel que los realizados de manera convencional o presencial.

2.1. Principio de inalterabilidad

Sin duda alguna es uno de los principios más importantes, ya que le aportan seguridad al acto administrativo producido de manera electrónica, pues a través de este concepto se garantiza la fidelidad del documento electrónico. En otras palabras, significa que dicho documento por ninguna circunstancia se puede o debe alterar, se encuentra muy ligado al principio de autenticidad del que se hablará posteriormente.

De tal manera que el acto administrativo se debe tornar inmodificable en manos de terceras personas. No obstante, en caso de que llegare a ser alterado, cambiado o simplemente modificado; entonces las autoridades competentes deberán comprobarlo, aunque como ya se mencionó anteriormente, gracias al principio de inalterabilidad el acto administrativo de carácter electrónico se presume completamente auténtico (Orozco, 2020).

Además, es importante tener en cuenta que cuando el contenido del mensaje de datos se llegue a alterar por algún motivo, y en caso de que se utilice una firma digital o electrónica en el mismo documento, se debe permitir demostrar que ha existido dicha alteración. De tal manera que el mensaje de datos deja de tener un valor real y se tachará de falso (Parra, 2018).

Lo anteriormente destacado aduce que la firma electrónica o digital en el documento electrónico es bastante importante porque permite identificar la idoneidad y exactitud del acto. Por tal motivo, la firma se encuentra completamente ligada al principio ya que el complemento de estos parámetros le aporta mayor confianza al acto. Así lo explica la Ley

527 del año 1999, cuando habla de la estabilidad, inmutabilidad del acto administrativo para que se configure la inalterabilidad del documento, es decir, que se encuentre completamente intacto para los administrados (Orozco, 2020).

2.2. Principio de autenticidad

Este principio por esencia garantiza la no falsedad del acto administrativo electrónico, en donde también le aporta seguridad al documento electrónico. Y al decir que se encuentra completamente autentico se presume que no está viciado. Dicho principio se materializa al momento en que el administrado o interesado accede a verificar la fecha y hora de la notificación electrónica del acto administrativo de carácter particular, en donde realmente a partir de esta situación se comienzan a producir todos los efectos jurídicos respectivos. Sin embargo, esto no quiere decir que el acto administrativo deba ser verificado para que tenga la autenticidad ya que el acto administrativo electrónico de carácter general o particular se presume por esencia completamente auténtico (Orozco, 2020).

1.2. Principio de integridad

Es importante mencionar que todos los principios se complementan entre sí. Además, ayudan a entender un poco más a fondo el concepto que se tiene por acto administrativo de carácter electrónico y analizar un poco toda la seguridad que le aporta cada uno de los elementos nombrados en el presente escrito.

Por esencia este principio, también tiende a garantizar la notificación electrónica de los actos administrativos de carácter electrónico, en donde al administrado se le debe asegurar que el documento electrónico que ha recibido se encuentra completamente íntegro. En otras palabras, el documento recibido debe ser completamente idéntico al elaborado o concretamente debe ser el mismo para los actos administrativos de carácter particular. Sin embargo, este mismo principio también debe garantizar a los actos administrativos de carácter general que se produzcan por medios electrónicos. Por otro lado, se debe tener en cuenta que cuando exista una alteración o cambio en el acto mismo, se podrá verificar con las herramientas tecnológicas y desarrolladas adecuadamente por los sistemas pertinentes.

Para comprender un poco más a fondo esta figura, se debe decir que el principio consta de un valor agregado que obviamente no contiene el soporte plasmado en el papel. En donde todas las actuaciones administrativas que se insertan con la herramienta de la

internet, deberá ser completamente visible para todas las personas y de esta forma, la transparencia y publicidad de los procedimientos administrativos aumentarían gradualmente (Rincón, 2019).

Adicionalmente a ello, el principio en mención:

Se encuentra muy ligado al principio de la ética ya que se traduce en la lealtad y transparencia que tiene la administración para realizar cada actuación y de esta forma, se afianza dicha lealtad al documento. En donde se puede decir que, el principio de la buena fe también juega un papel muy importante en la producción, desarrollo y ejecución del documento electrónico (Orozco, 2020, Pág, 19).

1.3. No repudio:

Este principio no es muy destacado por la doctrina y tampoco se encuentra taxativamente plasmado en la Ley. Sin embargo, es bastante importante para la configuración de los actos administrativos de carácter electrónico ya que la contribución de una seguridad inigualable para los actos mismos. Se trata de, la relación existente entre la administración pública con los administrados. Es decir, es una especie de acuerdo de voluntades entre las dos partes para firmar el documento electrónico y el acuerdo que se tiene expresamente con el contenido de este (Orozco, 2020).

2. Elementos de eficacia y validez

Es pertinente decir que los elementos de eficacia y validez son bastante indispensables para los actos administrativos de carácter electrónico, ya que de no contener estos elementos o preceptos se acarrearían vicios que afectarían desde luego la legalidad del acto mismo.

Por un lado, el elemento de validez radica en las condiciones que contiene un acto administrativo para que sea valorado de manera positiva por adaptarse o ajustarse idóneamente al ordenamiento jurídico, de tal manera que por ninguna razón dicho acto debe ostentar una valoración negativa (Oaxaca, 2020)

Por otro lado, la eficacia se caracteriza principalmente por ser fundamental al acto mismo ya que hace parte integral de él, debido a que son los efectos generados a través de los cuales se les dio vida jurídica. De tal manera que; “un acto perfecto, legalmente producido e integralmente valido, genera una eficacia perfecta y apta para lograr los objetivos que persiguen su expedición” (Pérez, 2016. Pág. 52). En donde, “gracias a la

figura de la eficacia se puede legitimar el acto, y otras presunciones tales como la firmeza del acto, la publicidad, y la legalidad”. (Pérez, 2016, pág.54).

3. Gobierno electrónico.

Es importante determinar que la función del Gobierno Electrónico y las políticas públicas se relacionan directamente al adoptar la figura de las TIC. En efecto, el uso de las tecnologías de la información es cada vez más frecuente para mejorar las funciones del sector público. En otras palabras, “el e-gobierno pone las bases para generar beneficios dentro de las administraciones públicas derivados de la utilización de las tic en las diferentes dimensiones de la acción pública”. (Oaxaca, 2020, pág. 11)

Ahora bien, el Gobierno electrónico en Colombia ha sido un reto para la gestión pública del Estado, ya que se ha tenido que trabajar arduamente en todo el tema de la inclusión digital. Pues uno de los temas más preocupantes con relación a esta figura es la falta de internet en los lugares más remotos del país. Es decir, no todas las personas del territorio nacional utilizan internet y en caso de emplearlo, no todas las personas hacen uso e interaccionan con las administraciones públicas a través de este método. Es importante destacar que esta situación ha formado una brecha de preocupación porque a pesar de que como ya se dijo anteriormente, no existe internet en todos los lugares del país; ese no es el único problema. Pues la falta de utilización de los canales virtuales para la gestión pública no son empleados por muchos. A razón de esto, se torna necesario diferenciar a las personas que no tienen internet de las que si lo tienen pero que no acceden a los canales.

Los últimos estudios realizados sobre la materia indican que incluso en los países con mayor nivel de desarrollo de acceso a Internet y e-gobierno, las desigualdades en el tipo de uso o los canales de acceso todavía siguen siendo factores a tener en cuenta a la hora de entender la inclusión digital.. (Ortega, 2017. Pág., 23).

En otras palabras, la función del Gobierno Electrónico en la gestión pública se torna indispensable para el desarrollo de las actividades que emana las entidades administrativas en pro del actuar ágilmente o eficazmente por parte del gobierno nacional en Colombia. Además de ello, es importante entender que uno de los aspectos más indispensables para la existencia del Gobierno Electrónico es el acceso a internet y más

aún; la implementación de todos los canales digitales o sedes electrónicas que figuren como prestadoras de servicios de calidad y de satisfacción de necesidades para todos los administrados. Junto con todo lo anteriormente relacionado, es necesario:

Considerar que el desarrollo del e-gobierno en un país se puede convertir no sólo en un factor estratégico de cara a la formulación de políticas para la mejora de la alfabetización digital, sino también en un contenido necesario para animar a la ciudadanía a interaccionar con los poderes públicos y, con ello, mejorar la calidad de la democracia y de la gestión y las políticas públicas. (Sánchez, 2017. Pág, 25).

Por otra parte, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico manifiesta que en el Gobierno electrónico se deben implementar relaciones abiertas y de transparencia administrativa. Además que todo el desarrollo o evolución de este importante fenómeno tiene una relación estrecha con la Web 2.0 en el marco de las administraciones públicas. Es decir, la figura de transparencia juega uno de los ejes más fundamentales en este aspecto ya que facilita el acceso a la información pública relevante del Gobierno y también permite el conocimiento de todos los antecedentes de informaciones de los cuales se pretenda acceder de años anteriores (Pastrana, 2018).

Por otro lado, la misma Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico manifiesta que necesariamente debe existir un intercambio de información, una interoperabilidad en el desarrollo de las funciones y una computación existente en la nube. Debido a que una de las herramientas más indispensables de todas las administraciones públicas es desarrollar actividades a través de instrumentos funcionales que permitan mejorar cada vez más el funcionamiento para satisfacer las necesidades de los administrados o de los ciudadanos en una sociedad.

Asimismo, con el paso del tiempo el Gobierno Electrónico a tenido que ir desarrollando diversas propuestas de análisis en cuanto al intercambio de información, e incluso también cuando se habla de interoperabilidad y computación en la nube ya que estas figuras se pueden presentar de diferentes formas. De tal manera que:

No cabe duda de que el estudio del e-gobierno desde las relaciones interadministrativas seguirá siendo uno de los ámbitos de mayor

crecimiento como consecuencia de la importancia de los proyectos en marcha, así como por la necesidad de lograr evidencias que nutran la actividad gubernamental del futuro en lo que respecta a iniciativas en las que se pretenda superar la clásica distribución competencial mediante la utilización de tecnologías en los procesos administrativos (Triviño, 2020. Pág,2).

En otro aspecto, para poder entender un poco más a fondo la importante figura del Gobierno Electrónico es indispensable hacer referencia al Big Data ya que, para las administraciones públicas es un instrumento que mide y permite administrar de una forma más exacta. Por tal razón, se generan predicciones con decisiones muchísimo más elaboradas e inteligentes. En efecto, de esta herramienta se derivan tres importantes figuras conocidas como; volumen, velocidad y variedad.

4.Sedes electrónicas.

Una de las figuras más relevantes del Gobierno Electrónico se materializa en las sedes electrónicas de las administraciones públicas, ya que permiten una garantía para los ciudadanos con el fin de que puedan acceder con mayor facilidad a la administración. En efecto, se debe salvaguardar la integridad, calidad de los datos, veracidad de la información proporcionada, y transparencia en toda la información derivada de los portales electrónicos. Por esta razón, es importante comprender que todos los sitios electrónicos estarán conformados o asegurados por firmas electrónicas que desde luego faciliten la identificación del titular de dicha información, pues se debe amparar la comunicación entre la administración con los administrados. La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico manifiesta que:

En los sitios electrónicos no podrán figurar avisos de exención de responsabilidad por el contenido de las mismas. Cualquier dirección electrónica en las que figuren dichos avisos no podrá considerarse una sede electrónica, ni formará parte del sistema de Gobierno Electrónico y así deberá figurar con caracteres relevantes en todas sus páginas (Carta, 2007, Pág, 16).

Así las cosas, se tiene que las tecnologías de la información más conocida como las TIC han cambiado prácticamente la vida de todos los ciudadanos y específicamente las relaciones de los mismos con las administraciones públicas, pues se han generado actividades y procedimientos administrativos más dinámicos, en donde diversas

diligencias de papel han sido reemplazadas por medios electrónicos. De tal manera que se ha ido modificando o singularizando actividades tradicionalistas de forma progresiva. Sin embargo, pese a que existe la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico y diversas normas complementarias; aún no se tiene una norma principal o protagonista que establezca o regule directamente el funcionamiento de las TIC en cuanto a las relaciones de la administración pública con los ciudadanos del país. Por otro lado, es pertinente aclarar que si existe una seguridad jurídica del Gobierno Electrónico y principios que detonan características indispensables para determinar que el uso de las tecnologías de la información en entidades públicas para la gestión pública es completamente segura (Valencia,2020).

En consecuencia , se determina que la implementación del Gobierno Electrónico en el Estado colombiano es básicamente para realizar las actividades públicas de la mejor manera posible y llevar una adecuada administración de justicia. Pues a través de este sistema se ha detonado más eficiencia en las prácticas administrativas del Estado mismo. Sin embargo, para que en un país surja la presencia de un Gobierno Electrónico, necesariamente se tiene que implementar una infraestructura (Amaya, 2018).

En Colombia el Gobierno Electrónico se fomentó principalmente para garantizar y prevalecer el interés común por encima del particular, en donde además se hacen presentes los principios constitucionales consagrados en la Constitución de 1991. De tal manera que el objetivo esencial es establecer una relación entre la administración pública con los ciudadanos y que no sean unos simples espectadores porque lo que se necesita es que sean miembros activos para el Gobierno mismo. Por tal motivo, se tiene que una de las herramientas más efectivas para propiciar dicho acercamiento es el uso de las tecnologías de la información (Ortiz, 2017)

Además de ello, se debe tener en cuenta que las tecnologías de la información (TI); son las destinadas a diseñar, gestar y crear contenidos, es decir, “mensajes”, ya sean estos textos, gráficos o datos. En este contexto son todos los procesos de producción de contenidos: prensa escrita, prensa electrónica, procesos informáticos, producción multivisual (Becerra, 2015, Pág. 19).

En consecuencia, también existen las tecnologías de las comunicaciones o denominadas TC, que son básicamente; las que se constituyen por medio de una plataforma lógica y una infraestructura tecnológica que permiten de cierta forma la transmisión y canalización de dichos contenidos por medio de canales y aplicaciones que

ostentas las telecomunicaciones. Todo lo anterior se emplea en Colombia con el fin de establecer un ingreso en línea por parte del Gobierno. Sin embargo, nada de esto se podría ejecutar sin la ayuda del internet (Covilla, 2020).

De igual manera, Colombia ha evidenciado diversos cambios positivos en cuanto a la utilización de herramientas electrónicas; un ejemplo claro de ello se puede observar con la expedición de la Ley 527 del año 1999, en donde se otorgó seguridad a los mensajes de datos. Es importante mencionar que esta Ley nació principalmente para regular todos los aspectos del comercio electrónico. Sin embargo, con el paso del tiempo es aplicable a todas las situaciones del derecho que lo requiera.

Como consecuencia se debe tener en cuenta que uno de los logros más importantes que la administración pública a través del Gobierno Electrónico quiere alcanzar es que principalmente la ciudadanía cuente con todos los servicios e instrumentos de alta calidad para así garantizar un fácil y eficaz acceso. Adicional a ello, se quiere también impulsar la colaboración de todos los ciudadanos colombianos al modelo del Gobierno electrónico para que lo conozcan más a fondo y de igual manera, se puedan encontrar las diferentes formas en que la administración pueda cumplir con el reto tecnológico para finalmente lograr proteger la privacidad y seguridad de la información (Fuentes, 2017).

Es por esta razón que para el Gobierno electrónico se realizó la implementación del Decreto Único Reglamentario específicamente proveniente del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones conocido como el 1078 del año 2015 en donde además también se encuentran estipulados los aspectos anteriormente referidos. Esto quiere decir, que a través del mencionado decreto se implementaron ciertas herramientas que buscarían la confianza de los ciudadanos con el Gobierno en Línea y así establecer todas las posibles consecuencias e impacto en la sociedad derivados de la relación entre la administración con los administrados.

Conclusiones.

Primeramente, se debe tener en cuenta que los actos administrativos promulgados en la modalidad electrónica ostentan la misma idoneidad y garantías que los encontrados físicamente. Con el fin de resolver el problema de investigación basado en las características esenciales del procedimiento administrativo electrónico en Colombia. Es indispensable manifestar que estos cuentan con una serie de requisitos y exigencias que hacen ideal su conformación. De tal manera que, es indispensable la existencia y aplicación de la inalterabilidad, autenticidad, integridad y no repudio; que fungen como

principios claves para el correcto surgimiento de los actos administrativos a la vida jurídica y emitidos por la administración pública.

Además de ello, se tiene que el procedimiento administrativo de carácter electrónico tiene la finalidad primordial de garantizar los fines esenciales del Estado. A lo largo del escrito se pudo observar la importancia de los requisitos y solemnidades que contienen estos actos tendientes a modificar, crear o extinguir relaciones u obligaciones de índole jurídicas y que también a través de los medios electrónicos se promueve la agilidad en las actividades administrativas y se incentiva cada vez más el uso de estos medios electrónicos para la administración pública del Estado colombiano.

Sin duda alguna, los medios electrónicos han fomentado garantías positivas en los actos administrativos y en el procedimiento administrativo como tal debido a que la esencia y el fin se logra exteriorizar con todos los elementos de eficacia y validez. De tal manera que se logra evidenciar seguridad y transparencia en la promulgación. En efecto, la doctrina nacional expresa que los medios electrónicos son una herramienta esencial para evolucionar la figura del procedimiento administrativo y en donde además, fortalece más las relaciones entre la administración pública con los ciudadanos. De igual manera, se tiene que gracias a la Ley 2080 del año 2021 por medio de la cuál se modificó la Ley 1437 del año 2011 (CPACA); se evidenciaron importantes y positivos cambios para la justicia en línea con el fortalecimiento de los medios digitales. Allí en Consejo de Estado, realizó esta reforma para mejorar principalmente el acceso a la justicia con mayor efectividad en sus actuaciones.

Ahora bien, se debe tener en cuenta que la eficiencia administrativa nace con la virtualización de sus actuaciones y la adaptación del contexto actual que vive el país debido al Covid- 19. Se puede decir que las practicas virtuales en la rama de lo contencioso administrativo y en general para todas las ramas del derecho; se ha convertido en una tendencia mundial y es precisamente debido a lo manifestado anteriormente, ya que la gestión pública del Estado ha tenido que evolucionar y desarrollar diversas herramientas para solucionar las situaciones que se presentan en la actualidad.

Los cambios tecnológicos conllevan a avanzar en la eficiencia por parte de la administración pública. No obstante, estas prácticas electrónicas no necesariamente significan que se erradican completamente los actos administrativos plasmados en el papel, ya que tiende a ser bastante complejo y un motivo de discusión por parte de muchos estudiosos en la materia; simplemente en la actualidad se lograron fortalecer grandes

cambios con la introducción de las TIC para el manejo de la información en la digitalización y la organización en dicha información.

REFERENCIAS

Amaya Báez, A. (2018). Administración pública electrónica, sedes electrónicas. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Director: Marco Emilio Sanchez Acevedo. Bogotá, Colombia. Disponible en la web: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/18402>

Becerra, J., Cotino, L., García, C., Sánchez, M., & Torres, J. (2015). La responsabilidad del Estado por la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Universidad Católica de Colombia. Pág. 1 – 211. Disponible en la web: <https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/la-responsabilidad-del-estado-por-la-utilizacion-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion.pdf>

Centro Latinoamericano de Administración Para el Desarrollo – CLAD (2007) “Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico” Aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Administración Pública y Reforma del Estado. Chile. Disponible en la web: <https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/Carta-Iberoamericana-de-Gobierno-Electronico.pdf>

Congreso de la República de Colombia (18 de agosto de 1999). Ley 527 de 1999: Diario Oficial: 43.673

Congreso de la República de Colombia (18 de enero de 2011). Ley 1437 de 2011: Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Diario oficial: No. 47.956

Covilla, J. (2020). SEIS PERSPECTIVAS DEL DERECHO PÚBLICO EN TIEMPOS DEL COVID- 19. *Repository Universidad Externado de Colombia- Tirant tech*, p, 1- 53. https://editorial.tirant.com/free_ebooks/E000020005146.pdf

Delgado, I. (2009). LAS NOTIFICACIONES ELECTRONICAS EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. Valencia: Tirant lo Blanch. Págs, 20-39.

Gutierrez, M, (2011), La audiencia juvenil y el acceso a la radio musical de antena convencional a través de internet. *Comunicación y Sociedad*, vol. XXIV, n. 2, pp.270-305. Disponible en la web: <https://revistas.unav.edu/index.php/communication-and-society/article/view/36208>

Fernandez, L. (2014). LA COMPETENCIA QUE TIENE LA ADMINISTRACIÓN PARA PRONUNCIARSE ANTE EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO EN LA LEY 1437 DE 2011: un estudio sobre su aplicación en el trámite de renuncia al contrato de concesión minera. *Repositorio Universidad Católica de Colombia* , p, 1- 31. Recuperado de:

<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/2267/1/PG%20PUBLICACION.pdf>

Fuentes, J. (2017). LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA ES PROCEDENTE CUANDO SE EXPIDEN ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER GENERAL Y PARTICULAR . *Repositorio Universidad Católica de Colombia*, p, 1- 26. Recuperado de:

<https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/23799/1/RM%20aprobado%20Jhon%20Fuentes%20Rojas.pdf>

López, P. (2009). Inclusión digital: un nuevo derecho humano. *Educación y Biblioteca*, n. 172, pp. 114-118. [Journal article (Paginated)] Disponible en la web:

https://eprints.ucm.es/11567/1/INCLUSION_DIGITAL%2C_NUEVO_DERECHO_H.pdf

Muñoz Caro, L. F. (2016). Del derecho electrónico en Colombia: interpretación normativa, producción y valoración probatoria de la firma digital y/o electrónica. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia. Disponible en la web: <https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/3053>

Oaxaca, E. (2020). LAS AVERÍAS DEL DERECHO ADMINISTRATIVO: LO QUE EL COVID-19 DEVELÓ. *Repositorio Universidad de la Salle*, p, 1- 20.

https://repositorio.lasalle.mx/bitstream/handle/lasalle/1689/RA%2035_jul2020-57-76.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Orozco, E. (2020) La notificación electrónica en el procedimiento administrativo colombiano. *Repositorio Universidad Católica de Colombia*. p, 1- 32.

Ortega, O. (2017). El Acto Administrativo en los Procesos y Procedimientos. Bogotá D, C: Colección JUS. Págs. 23-44.

Pastrana, A. (2018). NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA EN LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y SU RÉGIMEN JURÍDICO. *Repositorio Universidad Católica de Colombia* , p, 1-29. Recuperado de: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/10169/4/Art%3%adculo.%20No>

tificaci% c3% b3n% 20electr% c3% b3nica% 20en% 20la% 20jurisdicci% c3% b3n% 20conte
nsiosa% 20administrativa% 20y% 20su% 20r% c3% a9gimen% 20jur.pdf

Perez, R. (2013). Eficacia y Validez del Acto Administrativo. Repository Universidad Nacional de Colombia , p, 1- 151.
<http://www.bdigital.unal.edu.co/9877/1/700600.2013.pdf>

Rangel, J. (2016). LA TEORIA DEL ACTO ADMINISTRATIVO, VALIDEZ EFICACIA Y ELEMENTOS DESDE LA NORMATIVIDAD Y JURISPRUDENCIA EN COLOMBIA. Repository Universidad Santo Tomás, p, 1-26.
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12631/2016javiercuellar.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Rincón Rodríguez, J. C. & Urrea Montenegro, M. A. (2016). Estudio para la implantación de modelo Protected Intersections en el marco de las rutas ambientales seguras peatonales en la intersección de la calle 53 con carrera 60. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Ingeniería. Programa de Ingeniería Civil. Bogotá, Colombia. Disponible en la web:
<https://repository.ucatolica.edu.co/handle/10983/14005>

Sánchez, A. (2014). Eficacia y validez del Acto Administrativo electrónico- una perspectiva del derecho comparado entre Colombia y España. Bogotá, D.C. Universidad Católica de Colombia. p, 1- 57.

Santofimio, G. (2007) Tratado de derecho administrativo. Bogotá, D.C. Universidad Externado de Colombia. p, 1- 79.

Triviño, P. (2020). Política pública y administración pública en tiempos del Covid-19, entre la necesidad y la contingencia. Universidad Nacional de Colombia, p, 1- 20. .

Valderrama Castellanos, D. (2018). El acceso a internet como derecho fundamental: caso costarricense y su viabilidad en Colombia. Novum Jus: Revista Especializada en Sociología Jurídica y Política, 12(2), 165-185. Disponible en la web:
<http://dx.doi.org/10.14718/NovumJus.2018.12.2.9>

Valencia, H (2020). Diccionario Espasa Derechos Humanos: Una comparación con Colombia. Madrid: Espasa Calpe.

Zambrano, F. (2015). ELEMENTOS LEGALES DE VALIDEZ JURÍDICA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDO A LA LEY 1437 DE 2011. Repository Universidad Santo Tomás, p, 1- 24. Recuperado de:
<https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11634/12631/2016javiercuellar.pdf?sequence=1&isAllowed=y>